

JUAN F. MARTÍN SECO

Economista



El paraíso europeo de FG

TODO el mundo sabe que cualquier mentira puede ser tenida por verdad con tal de que se haya repetido un número suficiente de veces.

Cualquier falacia termina siendo una evidencia si es considerada así por todos los centros de opinión.

Se construye bajo esta dinámica un cuerpo de creencias sociales del que nadie duda, que nadie analiza ni pone en cuestión.

Se aceptan sin más, como producto de ese «se» imperativo e impersonal, aunque en realidad de impersonal tengan poco, ya que obedece casi siempre a objetivos y fines que no son ni inocentes ni neutrales.

A los pueblos, de una u otra manera, siempre se les ha engañado, se les ha exigido sacrificios y privaciones en aras de no se sabe qué paraísos futuros. Ahora que ya no se llevan las «grandes ideas», la economía y sus exigencias ocupan su puesto.

MIEDO SINDICAL.— Resulta paradójico lo que ha ocurrido con el pacto social. El Gobierno y sus adláteres han centrado toda su estrategia en hacernos creer que la reactivación de la economía depende de que los agentes sociales pacten, y tales son los medios de convicción social de que disponen y tantos los intereses creados en este empeño que hoy es opinión unánime la necesidad y urgencia del acuerdo, hasta el punto de que esta contaminación ideológica ha llegado a parte de la izquierda y de los sindicatos, que—en un posibilismo absurdo—continúan pensando que el pacto es factible y deseable.

Sólo la presión social y el miedo a quedar como los malos de la película pueden justificar el hecho de que las organizaciones sindicales pasen por la humillación de continuar sentadas en la mesa, tras escuchar la panoplia de medidas que propone el Gobierno y que conforman un insulto a la gran mayoría de los ciudadanos.

La ideología más conservadora y antisocial—aunque, eso sí, disfrazada de Estado benefactor—se da cita en los documentos del Ejecutivo.

Las argucias, el doble lenguaje, el no llamar a las cosas por su nombre, la utilización de palabras que ocultan los objetivos, y las verdaderas intenciones, se entrelazan con una sola finalidad: hacernos creer que la creación de empleo exige la renuncia a los pocos derechos sociales que la sociedad española había conseguido tras cuarenta años de

dictadura.

Para el Gobierno, el pacto social es un saco en el que, con la excusa de la crisis económica y el miedo al desempleo, se pretende introducir todo tipo de medidas regresivas y antisociales.

El Ejecutivo socialista lo sabe muy bien; en realidad, bajo el influjo de la ideología liberal y la fe ciega en el mercado, piensa que nada se puede hacer para reactivar la economía, que no queda más que esperar la recuperación mundial.

Pero aprovecha el envite para transferir el coste de la crisis a las economías más débiles, para configurar un mercado laboral tipo jungla donde impere el darwinismo social, en la creencia de que la única forma de dotar de competitividad a la economía española es deprimiendo más y más los costes laborales y

o que queda en España es una parte de la población enriqueciéndose y una clase trabajadora cada vez más humillada

concediendo a las empresas todo tipo de prerrogativas frente a los trabajadores.

Las medidas propuestas poco tienen que ver con la reactivación económica, e incluso algunas pueden ser contraproducentes; pero, desde luego, servirán para trasladar de unos a otros el coste de la crisis.

Lo que está en juego no es el incremento de la renta, sino su reparto.

SOMBRIO DISEÑO.— Cuando uno lee o escucha las medidas que propone el Ejecutivo, no puede por menos que preguntarse si éste es el paraíso europeo que nos prometía Felipe González.

He aquí la panoplia propuesta:

Pérdida del poder adquisitivo de los salarios y descenso cada vez mayor del porcentaje de la renta nacional distribuida a los trabajadores—los sindicatos han estimado que en estos tres años se transferirían más de cinco billones de pesetas de los asalariados a los excedentes empresariales—.

Cerca de la cuarta parte de la población en paro y sin horizontes de encontrar un empleo.

Reducción progresiva de las prestaciones que cobran los desempleados.

Disminución por distintos procedimientos de las pensiones y un mercado laboral donde el trabajador, ante la amenaza del despido, deberá acomodarse a las pretensiones empresariales. Y tendrá que aceptar, además, la movilidad funcional, asumir cualquier cometido y estar presto a trasladarse de ciudad y de provincia si así lo exige la empresa.

El diseño es sobrecogedor.

Por una parte, un gran foso negro de miseria y desempleo, donde los mecanismos de solidaridad apenas funcionan y donde la misma expectativa de pensión de jubilación está truncada, puesto que el sistema de cálculo penalizará cada vez más a los parados.

Por otro lado, el resto de los trabajadores suspendidos por un hilo y con conciencia de que en cualquier momento pueden precipitarse en el vacío.

Carentes de garantías y de legislación que les proteja y bajo la intimidación del despido o la rescisión del contrato tendrán que someterse a cualquier tipo de chantaje.

CLASE HUMILLADA.— Lo que queda, con el paraíso europeo de Felipe González, es lo siguiente:

Por un lado, una parte reducida de la población enriqueciéndose—no iba tan descaiminado el anterior ministro de Economía cuando afirmaba que éste era el país donde se podía ganar más dinero en menos tiempo—.

Y por otro lado, una clase trabajadora cada vez más humillada, más insegura, con más riesgos e incertidumbres—aunque quizás con más cachivaches—pero, sobre todo, desarmada, escéptica, abandonada al fatalismo, traicionada por sus políticos y engañada mediante la estrategia de que había que unir fuerzas porque venía la derecha.

¿Qué tienen que decir ahora los posibilistas del pasado 6 de Junio?

CONTRA LA CONFUSION

Sindicalismo apolítico

ANTONIO GARCIA-TREVIJANO

EL mensaje del partido gubernamental sobre la condición obsoleta de los sindicatos es sintomático del estado en que se encuentra la izquierda. En este artículo, llamo izquierda a lo que se llama a sí mismo izquierda. Es tan infantil como preguntar a alguien, para saber como es, la opinión que tiene de sí mismo. Pero así se ha hecho el carácter de nuestra cultura política. Es lógico que la falsedad forme su personalidad como la mentira la de la infancia. La izquierda política, en el Gobierno, cree que la izquierda social está desfasada porque aún es reivindicativa, en unos tiempos donde el trabajo se ha convertido de una pena en un tesoro, que al parecer no necesita ser remunerado. Impedir una pérdida de capacidad adquisitiva en sueldos y pensiones es pedir demasiado. Pero todos saben que esta modesta ambición sindical sería diferente si, en lugar de estar frente a un Gobierno de izquierdas—que tantea formas indirectas de reducir ese poder adquisitivo—, estuviera ante un Gobierno de derechas ansioso de credibilidad democrática, que aquí se otorga según criterios de demagogia social. Unos sindicatos capaces de lograr el 14-D contra un Gobierno de izquierdas, y que fracasan frente a su política social, tienen el poder/deber de cambiar de táctica para que, con la ayuda parlamentaria de IU, ese Gobierno decline su conducta reaccionaria o entregue el testigo a una derecha que será, por necesidad, liberal y demagógica.

Donde hay intereses de clase o de categoría habrá conflicto social. Donde existan salarios, beneficios y libertades, habrá sindicatos. Y donde haya sindicatos, serán reivindicativos o no serán. En defensa de los intereses que representan, nada puede coartar su libertad de acción, salvo las leyes que definen sus condiciones mínimas de representatividad y máximas de coacción. Toda ley es una solución autoritaria a un conflicto de intereses sociales que la autonomía privada no puede resolver. Por eso, los sindicatos deben conseguir mediante leyes lo que no puedan lograr de las clases opuestas o divergentes mediante pactos. Y en esta procuración de leyes en favor de una clase, por afectar a la relación de poder en el Estado, la gestión sindical realiza una acción de política pura. Esta clara idea del sindicalismo clásico se oscureció cuando el Estado dejó de ser liberal—teóricamente neutral—para convertirse en patrón de millones de asalariados y deudor de millones de pensionistas. Y se ennegreció cuando los partidos dejaron de ser societarios para devenir estatales. Los partidos-gerentes de la economía pública consagraron entonces la doctrina, procedente del anarquismo, de que la acción sindical debe ser apolítica. Lo que hoy equivale a decir que no debe estar dirigida contra el Gobierno-Estado. Los dirigentes sindicales se creyeron tal absurdo, dominante en la opinión, y no se atrevieron a explotar el éxito político de la huelga ciudadana del 14-D.

El apoliticismo sindical es un mito. No fue real con los sindicatos anarquistas, ni con los verticales. El economicismo ha sido la manifestación primitiva de la conciencia sindical. La naturaleza política de la huelga no depende de la naturaleza de sus reivindicaciones, ni de las motivaciones de los dirigentes, sino de la importancia del movimiento y de la condición pública del destinatario de la protesta. El apoliticismo sindical, en una economía mixta de dos sectores, orientada por el Gobierno-Estado, haría marchar al movimiento obrero sobre una sola pierna. Sus defensores no parecen demasiado conscientes de la contradicción de su postura: fomentar el pacto sindical con el Gobierno, que es un acto político, y negarse a admitir que los sindicatos estén legitimados para madurar ese pacto con los medios de presión política que les son propios. No hay diferencia entre una huelga para inducir al Gobierno a pactar, y una huelga para hacer dimitir a un Gobierno recalitrante y poder pactar con otro mejor dispuesto. El avance de la crisis pone en entredicho no sólo la capacidad política del partido ministerial, que sigue deprimiendo la demanda interna con su manía de grandeza monetarista, sino a todas las piezas políticas y sindicales de un sistema de poder que, al no saber reaccionar ante la culpable pasividad de un Gobierno sin mayoría, confiesa su impotencia para cambiarlo por otro, de mayoría, que meta en vereda sensata a la economía productiva.